

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ACUERDO NÚMERO: CTFGJEZ/UT/036/2024

NÚMERO DE FOLIO: 321103824000314

LCDO. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Presidente del Comité de Transparencia, **MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ**, Vicefiscal de Apoyo Procesal y Vocal del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el **MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité de Transparencia, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren el artículo 11 apartado H, 13 fracción III, 19, 20 fracción V, 25 y 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; 27, 28, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 6, 8, 113 y 116 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracción VIII, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y,

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la información pública, presentada por **Fernanda Pérez Rivera** a través del Sistema Nacional de Transparencia, ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y,

RESULTANDO

PRIMERO. - El 21 de julio de 2024, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió una solicitud de información por parte de **Fernanda Pérez Rivera**, por medio del cual requiere a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo siguiente:

"...¿Qué equipos y tecnologías específicas (ej. Para análisis de ADN, radiografía forense, escáneres 3D, etc) están disponibles en los laboratorios de identificación humana)? ..."

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se admitió a trámite la solicitud de información de **Fernanda Pérez Rivera** con el número de folio **321103824000314**.

TERCERO. - En términos de lo establecido en el ordinal 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se turnó la solicitud de información a la Dirección General de Servicios Periciales por ser el área encargada de validar y certificar de oficio, los dictámenes periciales realizados por sus laboratorios y departamentos administrativos, a la cual se dio respuesta mediante oficio No. DGSP 547/2024, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas se encuentra facultado para conocer, dictar los acuerdos necesarios y

resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 apartado H, fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; artículos 8, 43, 44, 103, 104, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia, así como lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 82 fracciones I y III, 83, y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. - El folio que nos ocupa, solicita, entre otras cosas, información respecto de **qué equipos y tecnologías específicas (ej. Para análisis de ADN, radiografía forense, escáneres 3D, etc) están disponibles en los laboratorios de identificación humana,** al respecto es oportuno considerar:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en la fracción III del artículo 82, establece que la información reservada podrá clasificarse cuando:

I y II

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

IV a la XI.

Lo anterior, en armonía con la fracción III del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Por lo que a fin de resolver respecto a dicha solicitud de información se considera lo siguiente:

El artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la información que posee cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

Por su parte, el párrafo noveno del similar 21 del mismo ordenamiento señala que la seguridad pública, comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Al respecto, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece que son funciones del Ministerio Público, allegarse, requerir y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito.

Dicho lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su ordinal 113 fracciones I, V y VII, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en sus artículos 4 y 82 fracciones I y III;

establecen excepciones a esa obligación al permitir clasificar la información como reservada cuando: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; obstruya la prevención o persecución de los delitos.

Para tal efecto, con fecha 15 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el INAI, los cuales señalan que **los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.**

Es por eso que sirve como sustento para la presente clasificación de información, **el Punto Décimo Octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General**, la cual señala que podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público. Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. **Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.**

En esa tesitura, resulta procedente realizar la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que se analiza lo siguiente:

a. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;

En esa tesitura, no pasa desapercibido para este Comité la situación de inseguridad que prevalece en el Estado de Zacatecas, pues si bien, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado se está haciendo un enorme esfuerzo para abatir la impunidad y, en consecuencia coadyuvar a la disminución de la incidencia delictiva,

También es cierto que concurre la comisión de delitos de alto impacto como son: el secuestro, desaparición cometida por particulares, la extorsión, el homicidio y la privación ilegal de la libertad, entre otros, los cuales, en su etapa de investigación, requieren que se lleve a cabo todos los actos y diligencias necesarias que conduzcan

al esclarecimiento de los hechos. Cabe mencionar que, como parte fundamental de dicho proceso, se encuentra el cuerpo de peritos especializados en distintas materias, los cuales coadyuvan a través de los dictámenes que emiten, a dicho fin. No obstante, el resultado de dichos actos de investigación, requieren del uso de mecanismos y herramientas altamente especializados, que en la mayoría de las veces, son escasos en el mercado toda vez que su uso se encuentra limitado a temas de seguridad, tan es así que en materia de adquisiciones, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la fracción I del artículo 90 señala que los entes públicos, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través de procedimientos de adjudicación directa, cuando se realicen con fines de seguridad pública y, de no hacerlo, se comprometa el estado de fuerza de las instituciones públicas, la seguridad del Estado y sus municipios o alguna cuestión estratégica, en los términos de las leyes de la materia. Asimismo, cuando el conocimiento público de las especificaciones de los bienes o servicios a contratar pudieran afectar la seguridad pública del Estado o de los municipios, o se comprometa información de índole reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

De lo anterior se desprende la necesidad de preservar el sigilo respecto de las herramientas utilizadas en los actos de investigación, toda vez que dar a conocer a terceros no legitimados información respecto de la misma, podría proporcionar a grupos delincuenciales herramientas para llevar a cabo actos de contrainteligencia y con ellos entorpecer o viciar los procedimientos penales.

Al respecto, el artículo 40 fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la obligación de las instituciones de Seguridad Pública de no proporcionar información a quien no tenga derecho.

"Artículo 40: Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

(...)

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; " (sic) .

b. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:

El derecho fundamental de acceso a la información pública no es absoluto y por tal motivo, se debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación cuando dos o más de estos se encuentran en pugna. En este caso en particular, por un lado, se encuentra el

derecho del solicitante a conocer información que se genera por parte de esta Institución y por otro lado el derecho de la colectividad a vivir en un Estado de paz, libre de criminalidad y en el cual, su vida, integridad y seguridad personal y patrimonial, se encuentren debidamente resguardados por el Estado.

Dicho lo anterior y tomando en cuenta que las bandas del crimen organizado constituyen un poder paralelo basado en terror y control territorial, se debe preservar la confidencialidad de la información respecto de los métodos y herramientas utilizadas en el esclarecimiento de los hechos a fin de evitar que aquellos debiliten las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública, lo que implica que se deben tomar medidas más radicales para hacerle frente.

No es menor, que una de las herramientas utilizadas por esas bandas, es la recopilación de información trascendental por cualquier medio, en ese sentido, la "teoría del mosaico" sostiene que, en materia de seguridad nacional, para determinar una reserva, no debe analizarse de manera aislada la información que se solicita, puesto que una información aparentemente inofensiva puede generar una afectación cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión de conjunto. Es importante tomar en consideración la utilidad que pudiera tener para "cualquier persona" obtener datos específicos del personal que integra esta institución.

c. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio

La colisión de principios consiste en que dos normas, tomadas en sí mismas, concluyen a resultados recíprocamente contradictorios. Ninguna es inválida, ninguna tiene una precedencia absoluta. Lo que tenga validez dependerá de qué decisión deba adoptar a la luz de las circunstancias del caso concreto.

La finalidad de preservar el sigilo respecto de las características que revisten a las herramientas utilizadas para llevar a cabo actos de investigación, es evitar que personas ajenas a la institución y que, en un momento determinado, pudieran ser miembros del crimen organizado, lleven a cabo actos de contrainteligencia para desvirtuar o viciar los dictámenes que emiten los peritos y con ello, crezca aún más el índice de impunidad. No menos importante, lo relativo a su adquisición que, si bien es cierto, son herramientas altamente sofisticadas y de uso especializado y cuyo costo de adquisición puede resultar para cualquiera inasequible, también es cierto de los grupos criminales, cuentas con recursos materiales y financieros suficientes para la adquisición de bienes que les permitan hacer frente a las acciones realizadas por el Estado de Fuerza para combatirlos.

CUARTO. - En términos de lo dispuesto en los artículos, 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 4, fracción VI del artículo 24, fracción II del artículo 44, 100 y párrafo segundo del 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos de la ley estatal en

la materia, el Comité de Transparencia confirma la RESERVA DE LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en observancia y seguimiento a la solicitud de información 321103824000314 realizada mediante el Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, se

RESUELVE

PRIMERO. Se RESERVA LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los Estrados de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Así lo determinamos los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en Sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2024 en la Sala de Prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Zacatecas número 401, tercer Piso, Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, quienes firmamos al margen y al calce la presente Acta y damos constancia para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ
Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción

**VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

**VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ
Vicefiscal de Apoyo Procesal

MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ,
Titular del Órgano Interno de Control